



Las redes eléctricas están al límite. EFE

Las trabas regulatorias ponen la zancadilla a las redes eléctricas en pleno ‘boom’ renovable

Raúl Masa
Madrid

La avalancha renovable ha pillado a España con el pie cambiado en materia de infraestructura eléctrica. Se han puesto objetivos muy ambiciosos para reducir emisiones, con un fuerte empuje de la electrificación, pero al mismo tiempo se ha retirado la alfombra roja para favorecer la situación. El resultado es una red colapsada y, en gran medida, porque no hay una gestión administrativa eficiente.

Así se desprende del informe ‘Grid, Baby, Grid’, de BBVA Research, que sitúa el foco en un problema incómodo: el cuello de botella es institucional. Y es que durante la última década, la inversión en generación renovable casi se ha duplicado, mientras que la destinada a redes apenas ha aumentado un 20%. El desequilibrio no es técnico, es político.

Se ha incentivado la instalación de potencia sin asegurar que la infraestructura pueda transportarla y distribuirla. El resultado son colas de conexión cada vez más largas, congestión creciente y energía verde que se tiene que desechar. Según la Agencia Internacional de la Energía, más de 3.000 GW de proyectos renovables permanecen bloqueados en listas de acceso por falta de capacidad.

España es uno de los ejemplos más claros de esta descoordinación, según avanza el estudio. En 2024 se recortó alrededor del 1,4% de la producción renovable y el 88% de los nudos de la red de distribución estaban saturados. En la práctica, esto significa que en gran parte del territorio no existe capacidad firme para conectar nueva generación o demanda relevante.

Mientras, los plazos administrativos para nuevas infraestructuras pueden prolongarse hasta 10 u 11 años, y menos del 10% de la capacidad solicitada por nueva demanda fue concedida el pasado ejercicio.

Detrás de esta situación hay un marco regulatorio diseñado para otro contexto. Tras la crisis financiera, precisa el documento, se impusieron límites estrictos de inversión y retornos regulados bajos para contener costes. En distribución, el tope se fijó en el 0,13% del PIB. Aquella prudencia pudo tener sentido en un escenario de ajuste fiscal, pero hoy actúa como freno estructural.

La regulación prioriza evitar activos varados, cuando la transición exige lo contrario, inversión anticipatoria en un entorno incierto. Las consecuencias son inmediatas. Cuando la red está saturada, las renovables baratas no desplazan a las tecnologías fósiles, lo que incrementa la volatilidad y los costes del sistema.

La prudencia para invertir en redes de hace años tenía sentido en tiempos de crisis

En 2024 se recortó alrededor del 1,4% de la producción de energías verdes